Imprimir

La financiación privada de las campañas electorales en Colombia es una forma de clientelismo y de corrupción público-privada que suele usarse, cada cuatro años, para deslegitimar a los ganadores, llámense presidentes, alcaldes o gobernadores.
Entonces, viene el asunto de los topes, mecanismo falaz y artificioso con el que se justifica el trabajo siempre amañado de las autoridades electorales, conformadas previamente con criterios politiqueros. Como siempre ocurre, se abren y se celebran a rabiar investigaciones contra los gerentes, fiscales y contadores, para luego irlas cerrando en completo silencio.

Mientras se señala e investiga a quienes manejaron la campaña Petro presidente, la derecha, con denodado ahínco, exige la caída de Petro por ser beneficiario directo de la financiación irregular de las actividades proselitistas, por los dineros que su hijo se apropió de polémicos políticos de la costa Caribe que desembolsaron grandes cantidades de dinero en efectivo y por haber violado los topes, de acuerdo con las versiones periodísticas que circulan en los medios tradicionales. Los topes máximos constituyen una ridícula invención porque todos saben, incluidas las autoridades, cuáles son las triquiñuelas que existen para producir el engaño y el auto engaño a la hora de justificar gastos y desviar los recursos recibidos.

En todo este asunto sobresale la hipocresía de unos agentes políticos que en el pasado se opusieron a que, en proyectos de reforma política y electoral se aprobara que fuera el Estado el responsable de la financiación total de los costos de las campañas, en particular de las presidenciales. La reposición de votos es ya una forma de financiación estatal. La idea es que los costos en publicidad también los asuma el Estado, para evitar así la hiperinflación que sufren cada cuatro años los precios de las piezas publicitarias.

La participación interesada de poderosos agentes privados en la financiación de las aventuras electorales está asociada a las ideas que estos tienen sobre el país, cuál debe ser el papel del Estado y cuál el tipo de desarrollo económico que necesita Colombia. Porque hay una realidad inocultable: el actual modelo de desarrollo, insostenible sistémicamente, sale de las imposiciones de los mecenas que por décadas financiaron las campañas de candidatos presidenciales de corte neoliberal, ignaros de lo que significa ser un país biodiverso y

enemigos de consolidar un Estado y una sociedad modernas y civilizadas.

Agentes económicos como Sarmiento Angulo y otras familias de terratenientes y clanes políticos que viven de la captura mafiosa del Estado regional en varios departamentos y que claramente son enemigos de las selvas, son responsables de costear los sueños presidenciales de candidatos como César Gaviria Trujillo, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana e Iván Duque Márquez, politicastros que jamás entendieron qué es eso de ser un país biodiverso y pluricultural.

Por el contrario, todos a pie juntillas creyeron en el desarrollo agroindustrial soportado en el modelo de la gran plantación (monocultivos de caña de azúcar y palma africana) considerados por ambientalistas como "ecosistemas emergentes", mirados así con el objetivo de legitimar su existencia, subvalorando o negando sus impactos socio ambientales, paisajísticos y ecológicos. Fueron también cómplices de la potrerización de selvas y praderas y por supuesto de la expansión de títulos mineros que terminaron en manos de guerrillas y narco paramilitares. La minería ha devastado ríos y selvas bajo la mirada serena de gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez, quizás el peor de todos en materia de debilitamiento de las instituciones ambientales, deforestación, potrerización y expansión de la minería legal e ilegal en territorios biodiversos y diversos culturalmente hablando.

Así entonces, en la financiación de las campañas electorales confluyen lo que somos como individuos y como sociedad: mezquinos, estúpidos, hipócritas, cercanos, seguidores y admiradores del ethos mafioso; así como temerosos y alejados de dar complejas discusiones en torno a lo que significa vivir en medio de selvas húmedas, meandros y otros ecosistemas estratégicos, asumidos por millones de colombianos, incluidos los políticos, como obstáculos para alcanzar el siempre fantasioso desarrollo sostenible.

Germán Ayala Osorio

Foto tomada de: Canal Institucional